

UNIVERSIDAD SAN PEDRO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
PROGRAMA PROFESIONAL DE DERECHO



**Proceso contencioso administrativo y nulidad del acto
jurídico**

Trabajo de Suficiencia Profesional para obtener el título profesional de
abogado

Autor:

Espinoza Estación, Thalía Yasmin

Asesor:

Abg. Arias Cruz Fredy Robert

Barranca – Perú

2018

PALABRAS CLAVES

Tema:	Proceso Contencioso Administrativo y Nulidad del Acto Administrativo
Especialidad:	Derecho

PALABRAS CLAVES: Nulidad de acto administrativo, nulidad en el proceso contencioso administrativo, nulidades administrativas

Theme:	Administrative Litigation and Nullity of the Administrative Act
Specialty:	Law

Líneas de investigación: **Derecho**

DEDICATORIA.

ADIOS

Por haberme permitido llegar hasta este punto y haberme dado salud para lograr mis objetivos.

A mis padres quienes me han apoyado para poder llegar a esta instancia de mis estudios, ya que ellos siempre han estado presentes para apoyarme en todo este recorrido.

También a mi hijo y esposo quienes han sido mi mayor motivación para nunca rendirme en los estudios y poder llegar a ser un ejemplo para ellos.

Thalía Yasmin Espinoza Estacion

AGRADECIMIENTO:

Mi profundo agradecimiento a mis padres, quienes son mi motor y mi mayor inspiración, que, a través de su amor, paciencia, buenos valores, ayudan a trazar mi camino.

También un agradecimiento especial a todos mis docentes de la facultad de derecho de la Universidad San Pedro, que, con su sabiduría, conocimiento y apoyo, motivaron a desarrollarme como persona y buen profesional.

Thalía yasmin Espinoza Estación

INDICE

- I. Resumen
- II. Descripción del Problema.
- III. Marco Teórico.
 - 3.1. Antecedentes.
 - 3.2. El procedimiento General Administrativo.
 - 3.3. Tipos de proceso Administrativos
 - 3.4. Recursos Impugnatorios
 - 3.5. Requisitos de los Recursos Impugnatorios.
 - 3.6. Tipos de Silencios Administrativos
 - 3.7. El Procedimiento Contencioso Administrativo.
 - 3.8. Principios del proceso contencioso
 - 3.9. Agotamiento de la Vía Administrativa.
 - 3.10. Sujetos del Proceso Contencioso Administrativo.
 - 3.11. Actividad probatoria
 - 3.12. Las Medidas Cautelares.
 - 3.13. Efectos de la Sentencia
 - 3.14. Legislación Laboral.
 - 3.15. Jurisprudencia
 - 3.16. Derecho Comparado.
- IV. Análisis del Problema.
- V. Conclusiones
- VI. Recomendaciones
- VII. Referencias Bibliográficas
- VIII. Anexos.

I.- RESUMEN

El proceso contencioso administrativo es un medio en la cual se pone en funcionamiento la función jurisdiccional del estado, con el fin de lograr de manera eficiente y eficaz atender los requerimientos de los ciudadanos y darle la mayor protección a sus derechos cuando este se encuentre lesionado o amenazado por una actuación ilegal o inconstitucional por parte de la administración pública.

Para plantear el proceso contencioso administrativo es necesario que el administrado haya agotado la vía administrativa, para que dicha resolución que emitió el administrador pueda ser impugnado mediante el proceso contencioso administrativo, el cual se regirá por las normas contenidas en el presente código.

El proceso contencioso administrativo podrá plantearse con el objeto de obtener lo siguiente:

- La nulidad total o parcial, o la ineficacia de los actos administrativos.

La demanda del procedimiento contencioso administrativo deberá ser interpuesta dentro los siguientes plazos:

- Cuando el objeto de la impugnación sean las actuaciones a que se refiere el artículo 4 de los numerales 1, 3, 4,5 y 6, el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento o notificación de la actuación impugnada.

La actividad probatoria en el proceso contencioso administrativo restringe a las actuaciones recogidas en el procedimiento administrativo, salvo que se produzcan nuevos hechos o que se trate de hechos que hayan sido conocidos con posterioridad a inicio del proceso.

II.-DESCRIPCION DEL PROBLEMA

Mediante el código procesal civil del año 1993 se incorporaron en este la regulación del proceso contencioso administrativo en 5 artículos bajo el título de “impugnación de acto o resolución administrativa”, Así mismo el alcance era limitado, dado a que se estableció (artículo 540) que la demanda tenía por finalidad la declaración de la invalidez o ineficacia de un acto administrativo, limitándose con ello la efectividad de la tutela jurisdiccional de los particulares que acudían a dicho proceso.

Actualmente la ley “27584” del 17 de Abril del año 2002 que fue publicada en el diario oficial el peruano, ha recogido la legislación nacional vigente a través del contencioso administrativo y es inevitable entonces poner énfasis en las pretensiones y el objeto del contencioso –administrativo, la competencia jurisdiccional, los requisitos de admisibilidad y procedencia, la posibilidad de dictar medidas cautelares, los recursos que pueden ser interpuestos, como cuestiones fundamentales del proceso, en el cual el poder judicial no solo se limita a analizar si la administración actuó conforme a las normas si no también y principalmente a determinar si el organismo público implicado respeta los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos.

Ante el marco constitucional descrito por la consagración del proceso contencioso administrativo que garantiza la prohibición de restringir mediante normas el derecho de los particulares a cuestionar judicialmente las decisiones administrativas emitidas por entidades públicas; también que tanto la acción como el proceso contencioso administrativo encuentran regulados por aquellas leyes que se aplican supletoriamente y que regulan el ordenamiento jurídico en general.

III.- MARCO TEÓRICO:

3.1.- Antecedentes

El proceso contencioso administrativo ha transitado por una interesante evolución que remonta sus orígenes a las luchas por limitar el poder del estado, durante el ciclo XIX no existió en el Perú mayor interés por crear un proceso especial para resolver controversias sobre materias administrativas, ni se consideraba la posibilidad de contar con una magistratura especializada en su ámbito.

A inicios del siglo XX, con la ley orgánica del poder judicial de 1912, se estableció la posibilidad de cuestionar judicialmente la administración pública; posteriormente el anti proyecto de la constitución preparado en 1931 por la renombrada “comisión de villarán” propuso asignar, de acuerdo a los casos a la corte suprema o a la corte superior la resolución de los recursos contencioso-administrativo”, previo agotamiento de la vía administrativa.

Si bien esta propuesta no fue recogida en la constitución de 1933, ciertamente constituye un precedente importante en el desarrollo de este especial tipo de tutela de hecho ya que es un momento importante en nuestro país en cuanto a la concepción y establecimiento de mecanismos para el control jurisdiccional de la administración.

La constitución de 1979 creo en el Perú el proceso de amparo, destinado a la tutela de derechos fundamentales cuando sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad, funcionario o persona y también se consagro las acciones contencioso- administrativas, estableciendo en su artículo 240º que “las acciones contenciosas administrativas se interponen contra cualquier acto o resolución de la administración que causa el estado

Si remontamos al día de 03 de octubre de 1968, fecha que se produjo en el Perú el derrocamiento del gobierno militar de la primera etapa (1968-1975) del comandante general del ejército de JUAN VELASCO ALVARADO, gobierno que introdujo notorios cambios económicos y sociales, de particular

importancia la aparición del proceso contencioso administrativo en la normatividad legal.

En el año de 1967 el colegio de abogados de lima, bajo el decanato del jurista MARIO

ALZAMORA VALDEZ, organizo un “Fórum sobre lo contencioso administrativo en el Perú”, importante precedente académico que impulso el desarrollo del derecho administrativo peruano; y es a raíz de ello que el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado estableció en la corte suprema de justicia de la república una tercera sala de asuntos contencioso administrativo, laboral y derecho público general, según el artículo N° 4 del decreto ley N° 18060. Lamentablemente los magistrados de la época no habían sido formados en la materia, solo eran conocedores del derecho civil y penal igual que las normas procesales respectivas, solicitaron la modificación de la norma citada, volviéndose a la estructura anterior de la corte suprema, frustrando así una favorable evolución en los anales de la corte suprema de la república.

Fue Creado pero no regulado, tuvo que transcurrir más de una década para que el proceso contencioso administrativo contara con al menos algunas reglas procesales específicas que permitieran su implementación; en 1991, en la nueva ley orgánica del poder judicial se establecieron reglas procesales específicas para los denominados proceso contencioso – administrativo, las cuales se derogaron en 1993, al aprobarse el nuevo código procesal civil para incluir la regulación del proceso contencioso administrativo en 5 artículos bajo el título de "IMPUGNACIÓN DE ACTO O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVO) como una modalidad de los procesos abreviados.

Ciertamente no resulta idóneo –por no decir que era disfuncional –regular, dentro de un cuerpo normativo civil (relaciones de ámbito privado), un proceso de tan diferente naturaleza ,asimismo, el alcance era limitado dado

que se estableció (artículo 540°) que la demanda tenía por finalidad la declaración de invalidez o ineficacia de un acto administrativo, lo que llevo a considerar que en este proceso solo se controlaría la legalidad del acto, sin pronunciamiento de fondo de la decisión administrativa, limitándose con ello la efectividad de la tutela jurisdiccional de los particulares que acudían a dicho proceso.

Por parte de la constitución de 1993 consagro a su vez la denominada “acción contenciosa –administrativo”: “Artículo 148°. - Las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contenciosa – administrativa”.

Esta constitución agrego dos nuevos procesos constitucionales destinados en gran parte para el control jurídico de la administración pública : el “Habeas data” , en este proceso los ciudadanos pueden impugnar ante el juez la negativa de la administración pública a sus solicitudes de acceso a la información que obra en su poder y el proceso denominado “acción de cumplimiento”, era para que los ciudadanos puedan acudir ante el juez para solicitarle que requiera cualquier autoridad o funcionario de la administración pública acatar una norma legal o un acto administrativo para que cumpla con sus obligaciones

Finalmente, mediante R.M 174.2000-TUS se creó una comisión a la que se encargó de elaborar el proyecto de ley que regule el proceso contencioso administrativo. Dicha comisión concluyo con labor y el 05 de junio de 2001 fue pre publicado el proyecto de ley del proceso contencioso administrativo. Posteriormente dicho proyecto fue adoptado por la comisión de justicia del congreso de la república y luego aprobado. Con algunas modificaciones, luego de su promulgación la ley del proceso contencioso administrativo (ley 27584) fue publicada en el diario el oficial “EL PERUANO” el 07 de diciembre del 2001.

3.2.- EL PROCEDIMIENTO GENERAL ADMINISTRATIVO

Se denominó procedimientos administrativos a los distintos actos jurídicos expresados por la administración pública, orientados a emitir una resolución que causa efectos jurídicos sobre intereses y obligaciones o derechos de los sujetos administrados.

AGUSTIN GORDILLO Define que...,El procedimiento es uno de los ejes fundamentales del derecho administrativo, gracias a él los ciudadanos de una determinada comunidad tienen la seguridad de que los trámites administrativos desarrollados frente a un organismo público se realizan de forma rigurosa en base a las leyes pactadas por dicha comunidad, consiste en una serie de pasos que permitirán que los ciudadanos puedan sentirse al amparo de la ley de su país y ante cualquier duda pueda reclamar al organismo del estado sobre las actuaciones

PEDRO SAINZ DE ANDINO, afirma que.... “El procedimiento administrativo es el desarrollo formal de las acciones que se requieren para concretar la intervención administrativa necesaria para la realización de un determinado objetivo que es la concreción de un acto administrativo”

SEGÚN NUESTRO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

GENERALES, define que... “es el conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados”.

FRANCISCO GÓMEZ VALDEZ, define que... “Es un procedimiento administrativo a uno de los ejes fundamentales del derecho administrativo; gracias a él los ciudadanos de una determinada comunidad tienen la seguridad de que los trámites administrativos desarrollados frente a un organismo público se realizarán de forma rigurosa en base a las leyes estipuladas.

3.3.- TIPOS DE PROCESO

Definición. -

Es la sucesión de fases jurídicas concatenadas realizadas conforme al orden trazado por la ley, el juez, las partes y los terceros en ejercicio de los poderes, derechos, facultades y cargas que les atribuye la ley procesal o en cumplimiento de los deberes y obligaciones que la misma les impone, cursadas ante órgano jurisdiccional, pretendiendo y pidiendo la actuación de la ley para que dirima la controversia, que sean verificados los hechos alegados o que se imponga una pena o medida de seguridad al procesado averiguado que sea su delito o peligrosidad criminal, pretensión y petición que se plasmará en una sentencia pasada por autoridad de cosa juzgada

- PROCESO NO CONTENCIOSO

La que ejerce el juez en actos o asuntos que, o por su naturaleza o por el estado en que se hallan, no admiten contradicción de parte, emanando su parte intrínseca de los mismos interesados, que acuden ante la autoridad judicial, la cual se limita a dar fuerza y valor legal a aquellos actos por medio de su intervención o de sus providencias, procediendo sin las formalidades esenciales de los juicios".

Se tramitan en proceso no contenciosos los siguientes temas:

- **Inventario:** Relación ordenada de los bienes de una persona o de las cosas o efectos que se encuentran en un lugar, ya con la indicación de su nombre, número y clase o también con una somera descripción de su naturaleza, estado y elementos que puedan servir para su identificación o avalúo .Documento en que consta tal lista de cosas
- **Adopción:** Es un contrato que crea entre dos personas relaciones puramente civiles de paternidad o maternidad y filiación.
- **Sucesión intestada:** Llamada también sucesión legal es aquélla que se presenta a falta de la voluntad de la causante expresada en un testamento

- **Rectificación de partida:** Se realiza con la finalidad de inscribir los nacimientos, matrimonios, o defunciones de los peruanos ocurridos en el exterior, no registrados ante autoridad nacional. Y, se llevará a cabo cuando no se practicó dentro del plazo que señala la Ley; y la rectificación, cuando el juez lo considere atendible.
- **Declaración de desaparición, ausencia o muerte presunta:** La desaparición es un hecho jurídico verificable por el juez. Sin embargo, la ausencia es un concepto que requiere declaración judicial y que se hace a base de la desaparición comprobada y el transcurso establecido legalmente, Por tal motivo que la desaparición es primero, la ausencia es después.
- **Autorización para disponer derechos de incapaces:** La autorización se tramita con el Consejo de Familia, constituida con anterioridad; caso contrario se entiende el trámite con el Ministerio Público.
- **Administración judicial de bienes:** Son aquellos con los cuales se transmiten la posesión o el uso, mas no la propiedad, y los que tienen por finalidad hacer producir sus frutos a los bienes que conforman el patrimonio.

- **PROCESO CONTENCIOSO**

Se denomina contencioso el proceso que se tiende a la obtención de un pronunciamiento que dirima un conflicto u oposición de intereses suscitado entre dos personas que revisten la calidad de partes, teniendo por objeto una pretensión, siendo indiferente que el demandado se oponga a ella o se rehúsa la controversia, ya no sea compareciendo al proceso o por el expreso reconocimiento de los hechos y el derecho invocados por el actor.

Procesos Contenciosos son aquellos también que tienden a la obtención de un pronunciamiento que dirima un conflicto u oposición de intereses suscitados entre dos o más personas

- . **Proceso de cognición:** Este proceso tiene como objeto inicial la pretensión del actor, es decir, el derecho que aquella estima que tiene y que pretende que se declare y que puede ser una mera declaración de un

derecho preexistente, la creación de un nuevo derecho o la condena al cumplimiento de una obligación

Es aquel donde el órgano jurisdiccional debe declarar la existencia o inexistencia del derecho

. **Proceso ejecución:** Es aquel de pretensión insatisfecha, donde ya existe una relación jurídica material y el órgano jurisdiccional solo ordena su actuación, es decir, buscar adecuar lo que es lo que debe ser. Es suma estos procesos tienen por finalidad la ejecución del derecho preexistente a favor del accionante.

. **Proceso cautelar:** Es aquel que tiene como propósito asegurar una prueba o el cumplimiento de la decisión efectiva que se expida en otro proceso principal, por el peligro que pueda significar la demora del trámite de este proceso.

3.4.- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Los recursos surgen como un remedio a la legal actuación de la administración, son medios legales que el ordenamiento jurídico pone a disposición de particulares para lograr a través de impugnación, que la administración rectifique su proceder, son la garantía del particular para la efectiva protección de su situación jurídica.

Es un acto por el cual el sujeto legitimado para ello pide a la administración que revise, revoque o reforme una resolución administrativa, o excepcionalmente un trámite, dentro de unos determinados lapsos siguiendo unas formalidades establecidas y pertinentes al caso.

- EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

Tiene por finalidad que el mismo funcionario revise nuevamente expediente administrativo a raíz de una nueva prueba o hecho nuevo invocado por el

Administrado, en este caso la reconsideración se solicita que el funcionario que resolvió la solicitud o el expediente, vuelva a pronunciarse sobre la misma materia. El sustento para esta nueva evaluación es un nuevo medio probatorio presentado por el administrado o la ocurrencia de un nuevo hecho que modifica la situación en la que se resolvió inicialmente el expediente. Por ello, esta nueva prueba o el nuevo hecho son requisitos indispensables para que proceda el recurso de reconsideración. Únicamente en aquellos casos donde la entidad que resolvió el recurso constituya la única instancia administrativa, no será necesaria la presentación de la nueva prueba. Por otra parte, el recurso de reconsideración constituye un recurso de carácter opcional, pues el administrado puede optar por no interponerlo lo cual no impide que se pueda presentar un recurso de apelación, esto es, la reconsideración no es requisito para la interposición del recurso de apelación.

- RECURSO DE APELACIÓN

Es el medio impugnativo ordinario a través del cual una de las partes o ambas (Apelante) solicita que un tribunal de segundo grado examine una resolución dictada dentro del proceso por el juez que conoce de la primera instancia cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

- EL RECURSO DE REVISIÓN

Constituye un mecanismo excepcional en el procedimiento administrativo y se aplica únicamente en aquellos casos donde el recurso de apelación es resuelto por un funcionario o autoridad que no constituye la autoridad de competencia nacional en el sector correspondiente. En este caso, el recurso se interpone ante la autoridad que resolvió el recurso de apelación a fin de que lo eleve a su superior jerárquico. Se trataría, entonces, de una tercera

instancia en la cual se revisaría el procedimiento, para emitir una resolución definitiva en la vía administrativa.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 207º de la Ley N.º 27444, el plazo para interponer los recursos administrativos es de quince días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del acto que se desea impugnar. Asimismo, dicho artículo dispone que las entidades deberán resolver los recursos en un plazo no mayor de treinta días hábiles contados desde el día siguiente a la interposición del recurso. Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho de los particulares quedando firme el acto que se deseaba impugnar.

3.5.-REQUISITOS DE LOS RECURSOS

En los recursos, deberá señalarse el acto que se impugna y se deberán cumplir los requisitos previstos en el artículo 113º de la Ley N.º 27444. Los recursos requieren ser autorizados por un abogado habilitado para ejercer la profesión.

Obre el agotamiento de la vía administrativa Dependiendo del procedimiento, la resolución que resuelve los recursos administrativos de apelación o de revisión constituyen la última instancia en la vía administrativa, por lo que quedaría agotada con las decisiones sobre estos recursos. De este modo, el mecanismo para cuestionar estas resoluciones que ponen fin al procedimiento administrativo sería la demanda contencioso administrativa. Así lo prevé el artículo 218º de la Ley N.º 27444

3.6.- TIPOS DE SILENCIOS ADMINISTRATIVOS

Es una de las formas de extinción de los procedimientos administrativos y es una figura jurídica que permite cuando se presente inactividad por falta de resolución en un procedimiento administrativo, se impute a la administración

de que se trata de un acto presunto, que tendrá la condición de verdadero acto, en caso que las reglas del silencio lo configuren como estimatorio y que por el contrario, será ficción legal, si se configura como desestimatorio y a continuación se mencionara dos tipos de silencios administrativos:

- **SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO:** Este silencio genera un acto administrativo de carácter presunto que pone fin al procedimiento a favor del administrado y Procede únicamente en los supuestos en que la administración no resuelva el fondo de la petición del recurrente en el plazo de la ley establecido y en este tipo de modalidad de silencio opera de manera excepcional presumiendo a favor del administrado que la administración ha adoptado una respuesta de carácter positivo ante la petición formulada. Esta doctrina ha sido confirmada por el tribunal constitucional que, en reiterada jurisprudencia, ha señalado:

“.. El administrado puede acogerse al silencio administrativo positivo solo si existe mandato expreso que declare dicho mecanismo procesal”. (Sentencia N° 1280-2002AA/TC Y 1484-2002-AA/TC, del 07 de enero del 2003 y 08 de marzo del 2004).

La aprobación automática de lo solicitado opera ante el incumplimiento de la administración pública de resolver la solicitud del administrado dentro el plazo establecido en la norma o el máximo de (30) días, al que se le adicionan (5) días que se tiene para notificar a partir de la expedición del acto administrativo.

Además del transcurso del plazo, se requiere que el solicitante cumpla con presentar la solicitud pertinente, acompañando la documentación sustentaría y requerida y la existencia de un mandato expreso.

- **SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO.**-Procede ante la omisión de dar una respuesta por parte de la administración, pero entendiendo que la decisión de la autoridad es negativa, el silencio mencionada anteriormente surge por disposición de la ley, pero no se aplica de manera automática y

permitirá al ciudadano considerar denegada su petición a efectos de interponer al recurso administrativo o la demanda administrativa correspondiente o esperar a que la administración se pronuncie. El SAN es un mecanismo que opera solo por decisión del particular, es decir, no lo obliga.

Así lo ratifica la doctrina jurisprudencial del tribunal constitucional que en la sentencia N° 1003-98-AA/TC (Caso Alarcón Meléndez) señaló:

“...habiendo transcurrido el plazo en exceso sin que la administración se haya pronunciado por la solicitud del demandante, ha operado el silencio administrativo negativo, por lo que el recurrente de acuerdo al artículo n° 188° inciso 3 de la ley N° 27444, se encuentra habilitado para interponer los recursos administrativos y las acciones judiciales pertinentes...” (Sentencia N° 1972°-2007-AA/TC, del 08 de enero del 2007)

Se tiene, por consiguiente, una naturaleza potestativa, pues el particular puede esperar a que la administración se pronuncie o decidir impugnar la inactividad administrativa ante el poder judicial (proceso contencioso administrativo). En Definitiva, busca proteger los derechos a la tutela judicial efectiva y de acceso a la justicia.

3.7.- PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

El procedimiento contencioso administrativo es un proceso por medio de la cual se pone en funcionamiento la función jurisdiccional del estado. Planteando una pretensión que brinde una efectiva tutela a una situación jurídica subjetiva que ha sido lesionado o que es amenazada por una actuación ilegal o inconstitucional de la administración pública.

PEDRO CARTOLÍN, al respecto señala: “La acción contenciosa administrativa implica una contienda entre un particular y la administración pública, la cual resulta por el poder judicial, mediante esta acción, se cuestiona una decisión de la administración desde el punto de vista jurídico y

a su vez se pretende proteger la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados”

MARCIAL RUBIO CORREA, Expresa lo siguiente “La acción contenciosa administrativa es el derecho que tiene las personas de recurrir ante el poder judicial para que anule con fuerza obligatoria cualquier acto o resolución del poder ejecutivo o de otros órganos administrativos del estado, que pronunciándose sobre derechos individuales que perjudican a una o más personas”

SEGÚN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO... “La acción contencioso administrativa prevista en el Artículo 148 de la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados.

3.8.- PRINCIPIOS DEL DERECHO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO:

El proceso contencioso administrativo se rige por los principios que se enumeran a continuación y por los del derecho procesal, sin perjuicio de la aplicación supletoria de los principios del derecho procesal civil en los casos en que sea compatible:

- PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN. - Los jueces no pueden dejar de resolver el conflicto de intereses o la incertidumbre con relevancia jurídica por defecto o deficiencia de la ley, en tal caso se deberá aplicar los principios generales del derecho administrativo. En este principio debe entenderse que por la simplicidad del caso de que el juez tiene que emitir una sentencia en u proceso, este principio prohíbe que los jueces emitan sentencias inhibitorias que declaren procedente una demanda.

- PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL.- En el proceso contencioso administrativo las partes deben ser tratadas con igualdad, independientemente de su condición de entidad pública o administrado. Por este principio las partes deberán tener las mismas oportunidades para ejercer su defensa. Así como a ser tratados con igualdad ante la ley y a no ser discriminados por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión. Posición económica o por cualquier otra índole (Artículo 2, inciso 2 de la constitución).

- PRINCIPIO DE FAVORECIMIENTO DEL PROCESO. – El juez no podrá rechazar la demanda laminarmente cuando exista incertidumbre sobre el agotamiento de la vía administrativa por falta de precisión del marco legal

Siempre de que exista un defecto de cualquier acto procesal que por su naturaleza sea subsanable, el juez debe conceder un plazo y la oportunidad para hacerlo.

-PRINCIPIO DE SUPLENCIA DE OFICIO.- El juez deberá suplir las deficiencias en las que incurran las partes, sin perjuicio de disponer la subsanación de las mismas en un plazo razonable en los casos en que no sea disponible la suplencia.

De esta forma, con la finalidad de evitar de que el proceso concluya o se dilate por una deficiencia formal, se establece como debe del que el juez supla cualquier deficiencia en la que puedan haber incurrido las partes, con lo cual el juez debe asumir un rol mucho más activo dentro del proceso, un compromiso para velar que el proceso cumpla con su finalidad procurando que este no se vea entorpecido por cualquier deficiencia.

3.9.-AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINITRATIVA

Para que proceda el inicio del proceso contencioso administrativo, la actuación impugnada debe haber agotado la vía administrativa, es decir, los

actos administrativos que agotan la vía administrativa podrán ser impugnados ante el poder judicial mediante el proceso contencioso administrativo a que se refiere el artículo 148° de la constitución política del Perú.

El agotamiento de la vía administrativa nos indica lo siguiente:

- La existencia de una decisión de la máxima autoridad contra la cual ya no puede interponer recurso jerárquico alguno.
- Que ha operado el silencio administrativo definitivo
- Que se haya declarado la nulidad de las resoluciones administrativas aun cuando hayan quedado consentida , siempre que agraven el interés del administrado, en el caso del recurso de apelación cuando el acto expedido o el silencio administrativo producido con motivo de la interposición de un recurso de apelación en aquellos casos que se impugna el acto de una autoridad u órgano sometido a subordinación jerárquica, en el caso de apelación es importante indicar que la forma más común que se agota la vía administrativa es a través de la presentación de un recurso de apelación y la resolución que resuelve el recurso de apelación agota la vía administrativa , esto quiere decir que aunque la autoridad competente resuelve esta resolución al resolver el recurso agota la vía administrativa ,el silencio administrativo sea positivo o negativa agota la vía administrativa , debe tomarse en cuenta que el agotamiento de la vía administrativa no necesariamente implica recurrir al poder judicial, se recurre al poder judicial cuando el pedido es desestimado.

Sin embargo, existen excepciones a este requisito:

- EXCEPCIONES AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA: No será exigible el agotamiento de la vía administrativa en los siguientes casos:

1. Cuando la demanda sea interpuesta por una entidad administrativa en el supuesto contemplado en el segundo párrafo del Artículo 13 de la presente Ley.
2. Cuando en la demanda se formule como pretensión la prevista en el numeral 4 del Artículo 5 de esta Ley. En este caso el interesado deberá reclamar por escrito ante el titular de la respectiva entidad el cumplimiento de la actuación omitida. Si en el plazo de 15 días a contar desde el día siguiente de presentado el reclamo no se cumpliera con realizar la actuación administrativa, el interesado podrá presentar la demanda correspondiente.
- 3.-Cuando la demanda sea interpuesta por un tercero al procedimiento administrativo en el cual se haya dictado la actuación impugnada.

3.10.-SUJETOS DEL PROCESO

- LA COMPETENCIA

Por razón de territorio es competente el juez del lugar del domicilio del demandado o el juez del lugar del domicilio del demandado o el juez del lugar donde se produjo la actuación impugnada. Por razón de la materia es competente el juez contencioso administrativo, pues la ley ha apostado por jueces especializados, pero en los lugares donde no existan jueces especializados la competencia recaerá en los jueces civiles.

-LA LEGITIMIDAD PARA OBRAR ACTIVA

La ley de manera expresa regula que la legitimidad para obrar activa recae, por regla general en la persona de quien alegue ser titular de la situación jurídica lesionada o amenazada por la actuación administrativa que está siendo impugnada en el proceso.

-LEGITIMIDAD PARA OBRAR PASIVA

La demanda contencioso administrativa se dirige contra:

- . La administración que expidió el acto impugnado.
- . La entidad administrativa que no se pronunció, por silencio, inercia u omisión

-MINISTERIO PÚBLICO

El código procesal civil, en su artículo 113°, le confiere atribuciones al ministerio público, como parte, tercero con interés y dictaminador.

Pero la ley del proceso contencioso administrativo establece que el ministerio público intervendrá:

- 1.- como dictaminador, antes de la expedición de la resolución final y en casación. Teniendo la calidad de obligatorio dicho dictamen, bajo sanción de nulidad.
- 2.- como parte cuando se trate de interese difusos. De conformidad con las leyes de la materia.

El dictamen del ministerio público es obligatorio, bajo sanción de nulidad.

Cuando el ministerio publico intervenga como dictaminador, el órgano jurisdiccional le notificara obligatoriamente con la resolución que pone fin a la instancia o con la que resuelve la casación, según sea el caso.

3.11.- ACTIVIDAD PROBATORIA:

La norma que habla respecto al capítulo de la actividad probatoria, se ha dispuesto que dentro del proceso contencioso administrativo no se puedan ofrecer más medios probatorios de aquéllos que habían sido actuados en el procedimiento administrativo, lo que supone una inexplicable limitación al derecho constitucional a probar, constituyendo dicha norma una norma inconstitucional. Sin embargo, la norma, en materia de actividad probatoria tiene tres normas que a continuación serán mencionadas:

La primera es aquella que dispone la actividad probatoria de oficio, lo que permitiría subsanar la deficiente disposición contenida en el artículo 27 de la Ley.

La segunda es aquella que establece que la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos, pues en estos casos, la carga de la prueba corresponderá a la Administración cuando se trate de demostrar la infracción administrativa. Finalmente, la norma que establece como obligación de la Administración proporcionar al Juez cualquier documentación que éste requiera.

3.12.- MEDIDA CAUTELAR

En termino general la regulación de las medidas cautelares no defiere mucho de la regulación establecida en el código procesal civil, tanto es así que la ley 27584 tiene una remisión expresa al referido cuerpo normativo. Sin embargo, tiene algunas particularidades que hay que destacar.

La primera de ella es establecer que si bien es cierto se requiere la verisimilitud del derecho para que se conceda la medida cautelar, se dispone el principio de presunción de legalidad de un acto administrativo no puede ser un obstáculo para la concesión de una medida cautelar.

Asimismo, dentro de los presupuestos para la concesión de una medida cautelar se colocan, al lado de la verosimilitud del derecho y el peligro en demora, la adecuación de la medida cautelar, requisito que intenta poner énfasis en la relación que debe existir entre medida cautelar y pretensión destinada a asegurar.

Finalmente, existe una norma que de manera expresa señala que en los procesos contenciosos administrativos, las medidas de innovar y de no innovar son especialmente procedentes, rompiendo con ello la regla

establecida en el Código Procesal Civil, conforme a la cual dichas medidas son más bien excepcionales.

3.13.- EFECTOS DE LA SENTENCIA CUANDO LA DEMANDA SEA DECLARADA FUNDADA

La sentencia podrá declarar, según las pretensiones planteadas, lo siguiente:

- La nulidad, total o parcial, o ineficacia del acto administrativo impugnado, de acuerdo con lo demandado.
- El restablecimiento o reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas que sean necesarias para el restablecimiento o reconocimiento de la situación jurídica lesionada, aun cuando no hayan sido pretendidas en la demanda.
- El plazo en el que la administración debe cumplir con realizar una determinada actuación a la que está obligada, sin perjuicio de poner en conocimiento del Ministerio Público el incumplimiento para el inicio del proceso penal correspondiente y la determinación de los daños y perjuicios que resulten de dicho incumplimiento.
- El monto de la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. Asimismo, la sentencia deberá señalar el tipo de obligación a cargo de la entidad, el titular de la obligación, el funcionario a cargo de cumplirla y el plazo para su ejecución. El personal de la entidad administrativa está obligado a dar cumplimiento a la sentencia, sin calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal y administrativa; estando obligado a realizar todos los actos para la completa ejecución de la resolución judicial.

CAPITULO II

3.14.- LEGISLACIÓN NACIONAL

□ LA CONSTITUCION POLITICA DEL PERU. -

ARTICULO. - En la constitución política nos indica sobre las resoluciones administrativas que... “los actos administrativos que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la acción de procedimiento contencioso administrativo”.

□ EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Artículo 27.- Actividad probatoria. -En el proceso contencioso administrativo la actividad probatoria se restringe a las actuaciones recogidas en el procedimiento administrativo, no pudiendo incorporarse al proceso la probanza de hechos nuevos o no alegados en etapa prejudicial.

Artículo 35.- oportunidad. -La medida cautelar podrá ser dictada antes de iniciado un proceso o dentro de este, que siempre que se destine asegurar la eficacia de la decisión definitiva.

Para tal efecto, se seguirán las normas del código procesal civil con las especificaciones establecidas en esta ley.

□ EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO GENERAL ADMINISTRATIVO

Artículo 29. - Definición de procedimiento administrativo

Es un conjunto de actos y diligencias tramitadas en las entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efecto jurídico individual individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados.

Artículo 207.- Recursos administrativos

207.1 los recursos administrativos son:

- a) Recurso de reconsideración
- b) Recurso de apelación
- c) Recurso de revisión

Artículo 218.- Agotamiento de la vía administrativa

Los actos administrativos que agotan la vía administrativa podrán ser impugnados ante el poder judicial mediante el proceso contencioso-administrativo a que se refiere el artículo 148° de la constitución política del Perú.

Artículo 158° inciso 1.- Queja por defecto de tramitación

En cualquier momento, los administrados pueden formular queja contra los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos establecidos legalmente, incumplimiento de los deberes funcionales u omisión de trámites que deben ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto en la instancia respectiva.

□ EN EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL DEL PERÚ**Artículo 113.- Atribuciones**

El ministerio público ejerce las siguientes atribuciones:

- 1.- como parte;
- 2.- como tercero con interés, cuando la ley dispone que se le cite; y
- 3.- como dictaminador

□ LEY DEL PROFESORADO DEL PERÚ

Artículo 52.- El profesor tiene derecho a percibir dos remuneraciones integras al cumplir 20 años de servicio la mujer y el varón 25 años de servicio; y tres remuneraciones integras, al cumplir 25 años de servicio la mujer y 30 años de servicio los varones”

□ LEY DE BASES DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA DEL PERU

Artículo 54.- Son beneficios de los funcionarios y servidores públicos: Asignación por cumplir 25 o 30 años de servicio se otorga un monto equivalente a dos remuneraciones mensuales totales al cumplir 25 años de servicio y tres remuneraciones mensuales al cumplir 30 años y es otorgada por única vez en cada caso.

CAPITULO III

3.15.-JURISPRUDENCIA

CAS. N° 2129-2002 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE TUMBES Y EL GOBIERNO REGIONAL.

En la constitución política del Perú prescribe: “La constitución prevalece sobre toda norma legal, la ley, sobre todas las normas de inferior jerarquía y así sucesivamente.

La publicidad es esencial para la vigencia de la norma del estado” a su turno el decreto legislativo N° 276 ley de bases de la carrera administrativa y de

remuneraciones del sector público, en su artículo 54 nos dice “Son beneficios de los funcionarios y servidores públicos: a).- asignación por cumplir 25 o 30 años de servicio se otorga un monto equivalente a dos remuneraciones mensuales totales al cumplir 25 años de servicio y tres remuneraciones mensuales al cumplir treinta años y es otorgada por única vez en cada caso.

CAS. Nº 3360-2003-AA/TC AREQUIPA

El tribunal constitucional se ha pronunciado respecto a los beneficios por cumplir veinticinco y treinta años de servicios se calculan en base a la remuneración total que señala el artículo 54° de la ley de bases de la carrera administrativa y de remuneraciones y no sobre la base de la remuneración total permanente que prescribe el artículo b) del artículo 8° del decreto supremo N° 051-91 PCM. Además, se debe tener en cuenta las normas que otorgan los beneficios a los trabajadores deben interpretarse en el modo más favorable a ellos, en aplicación del principio pro operario y no en desmedro de sus derechos con el presente caso.

CAS. Nº 268-2004-AA/TC

En la ley del profesorado del artículo 52 de la ley del profesorado 24029, aplicable al caso de autos, dice lo siguiente: “El profesor tiene derecho a percibir dos remuneraciones integras al cumplir 20 años de servicio la mujer y el varón 25 años de servicio ; y tres remuneraciones integras , al cumplir 25 años de servicio la mujer y 30 años de servicio los varones” , a su turno el artículo 213° reglamento de la ley de profesorado DS.01990- ED dice: “ el profesor tiene derecho a percibir dos remuneraciones integras al cumplir 20 años de servicio la mujer y 25 años de servicio el varón y tres remuneraciones integras al cumplir 25 años la mujer y 30 años de servicio el varón. Este beneficio se hará efectivo en el mes que cumple dicho tiempo de servicios, sin exceder por ningún motivo del mes siguiente.

CAPITULO IV

3.16.-DERECHO COMPARADO

COSTA RICA

El agotamiento de la vía administrativa será facultativo, salvo para lo dispuesto en los artículos 173 y 182 de la Constitución Política.

Artículos 173.-

Los acuerdos municipales podrán ser:

- 1) Objetados por el funcionario que indique la ley, en forma de veto razonada
- 2) recurridos por cualquier interesado

En ambos casos si la municipalidad no revoca o reforma el acuerdo objetado o recurrido, los antecedentes pasaran al tribunal dependiente del poder judicial que indique la ley para que resuelva definitivamente.

Artículos 182.-

Los contratos para la ejecución de obras públicas que celebren los poderes del estado, las municipalidades y las instituciones autónomas, las compras que se hagan con fondos de esas entidades y las ventas o arrendamientos de los bienes pertenecientes a las mismas, se harán mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo.

Si en los procesos establecidos contra el Estado, bajo la representación judicial de la Procuraduría General de la República, se ha acudido directamente a la vía jurisdiccional, sin haber agotado la vía administrativa, el juez tramitador, en el mismo auto que da traslado de la demanda, concederá un plazo de ocho días hábiles previos al emplazamiento previsto en el artículo 63 de este Código, a efecto de que el superior jerárquico supremo del órgano o la entidad competente, de acuerdo con las reglas del artículo 126 de la Ley general de la Administración Pública, confirme, o bien, modifique, anule, revoque o cese la conducta administrativa impugnada, en beneficio del administrado y sin suspensión de los procedimientos. Vencido el plazo indicado, si el jerarca supremo guarda silencio o mantiene la conducta impugnada, empezará a correr automáticamente el plazo otorgado para la contestación de la demanda, a partir del día hábil siguiente y sin necesidad de resolución que así lo disponga.

MEXICO:

La ley federal de procedimiento contencioso administrativo fue publicada en el diario oficial de la federación el 1 de diciembre de 2005, su última reforma fue publicada DOF 27-01-2017, donde en el capítulo V de la presente ley

regula la prueba en cuanto se refiere que el actor que pretende que se le reconozca o se le haga efectivo un derecho subjetivo que se encuentra vulnerado, deberá probar los hechos de los que se deriva su derecho y la violación del mismo.

En los juicios que se tramiten ante el Tribunal, serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la de confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones y la petición de informes, salvo que los informes se limiten a hechos que consten en documentos que obren en poder de las autoridades.

Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado sentencia. En este caso, se ordenará dar vista a la contraparte para que en el plazo de cinco días exprese lo que a su derecho convenga.

ARGENTINA

ACTUACIONES IMPUGNABLES

- 1.- Los actos administrativos y cualquier otra declaración administrativa.
- 2.- El silencio administrativo, la inercia y cualquier otra omisión de la administración publica
- 3.- La actuación material que no se sustenta en acto administrativo
- 4.- La actuación material de ejecución de actos administrativos que transgrede principios o noemas del ordenamiento jurídico.
- 5.- Las actuaciones u omisiones de la administración pública respecto de la valides, eficacia, ejecución o interpretación de los contratos de la administración pública, con excepción de los casos en que es obligatorio o se decida, conforme a ley, someter a conciliación o arbitraje la controversia.
- 6.-Las actuaciones administrativas sobre el personal dependiente al servicio

ECUADOR

Los medios de prueba de que se podrá hacer uso en este juicio serán los mismos que establece el código de procedimiento civil, excepto la confesión judicial, que no podrá pedirse al representante de la administración; pero en su lugar, la parte contraria propondrá por escrito las preguntas que quiere hacer, las cuales serán sometidas en vía de informe, por las autoridades o funcionarios de la administración, a quienes conciernan los hechos controvertidos.

El tribunal podrá disponer, de oficio antes de la sentencia, las prácticas de las pruebas que estime pertinentes para la más acertada decisión del asunto controvertido y terminada el término de la prueba, el tribunal dictara sentencia, dentro los doce días; desde la conclusión del termino de prueba hasta la expedición de la sentencia, podrán las partes presentar informes en derecho o solicitar audiencias de estrados, para alegar verbalmente. En los informes en la audiencia de estrados no podrán plantearse cuestiones extrañas a los asuntos materia de la Litis

IV. ANALISIS DEL PROBLEMA:

El Decreto Legislativo N° 1067 resuelve el problema a medias respecto a los procesos contenciosos administrativos, dado que Modifica el artículo 5° de la norma, incorporando como pretensión la indemnización por el daño causado con alguna actuación impugnante, conforme al artículo 238° de la Ley N° 27444, siempre y cuando se plantee acumulativamente a alguna de las pretensiones señaladas en dicho artículo, vale decir, que el daño sea resultado de una actuación administrativa impugnante. Y decimos que esta es una solución a medias puesto que no resuelve el problema en el caso de

la pretensión indemnizatoria planteada como pretensión principal, llegando al absurdo de asumir que dicha pretensión se tramita a través del proceso civil. En este caso consideramos que debemos recurrir al contencioso administrativo también, así como a las normas administrativas sustantivas aplicables, encontrándose esto último fuera de toda discusión. La pretensión indemnizatoria en vía principal, tramitada a través de Proceso Contencioso Administrativo, permite proteger el interés del administrado afectado sin que haya ocurrido una actuación administrativa determinada. Pretender distinguir la vía procesal según si la pretensión es principal o accesoria obligaría al juez civil a emplear la norma administrativa para resolver, lo cual es claramente inconsistente. Asimismo, el proceso civil no está diseñado para discutir ninguna de las pretensiones provenientes de las relaciones entre los administrados y la autoridad administrativa; siendo más bien el Proceso Contencioso Administrativo el que resulta pertinente para discutir si es que el comportamiento de la entidad administrativa ha vulnerado derechos o intereses de los administrados.

V. CONCLUSIONES:

El Proceso Contencioso Administrativo en el Perú está diseñado como un proceso eminentemente subjetivo y que tiende a ser de plena jurisdicción. Para ello es necesario que exista una amplia gama de actuaciones administrativas susceptibles de revisión a través de dicho mecanismo. En dicho ámbito se incluyen no solo declaraciones, sino también omisiones y comportamientos materiales. Ahora bien, no obstante que existen excepciones al principio de exclusividad, ello no implica que las actuaciones administrativas excluidas no sean susceptibles de revisión jurisdiccional, como es el caso de las normas administrativas y de los conflictos generados en la etapa de ejecución contractual en el contexto de contratación administrativa.

VI. RECOMENDACIONES:

1. Si bien la administración Pública tiene también atributos de auto-control requiere que por sus actos que causan estado, deba ser juzgada por organismos distintos a la propia administración, para que las resoluciones administrativas cuestionadas sean resueltas con mayor eficacia y justa para los administrados
2. Esta Ley de Proceso Contencioso Administrativo debería tener algún artículo para permitir la indemnización dentro del mismo proceso Contencioso Administrativo, así no suprimiría su verdadera eficacia.
3. Por la excesiva carga procesal de los procesos contenciosos administrativos, se debería volver a permitir que cuando se haya vulnerado derechos constitucionales mediante resoluciones administrativas, se pueda interponer las Acciones de Amparo para que estos actos sean resarcidos con prontitud y celeridad procesal. Dado que, en el reglamento del Código Procesal Constitucional, en su artículo, se precisó que es improcedente el amparo si existen vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del Derecho Constitucional amenazado o vulnerado, salvo cuando se trate del proceso de Habeas Corpus. Y por ello muchos jueces ya no aceptan la acción de amparo para la protección de estos derechos.

VII.- REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS:

Alarcón Flores Luis Alfredo - proceso contencioso administrativo comentado, Lima-2001

Barnes, Javier - El procedimiento administrativo en el Derecho comparado. Madrid: 1992

Cassagne, Juan Carlos – Derecho Administrativo I. Buenos Aires- Abeledo Perrot, 1997.

Cervantes Anaya, Dante: Manual del derecho administrativo, Lima-2000

Diez Sánchez, Juan José - El procedimiento administrativo común y la doctrina constitucional. Madrid: Civitas, 1992.

Diez, Manuel María – Derecho Administrativo. Buenos Aires: Plus Ultra, 1971.

Entrena Cuesta, Rafael - Curso de Derecho Administrativo. Madrid: Tecnos, 1988.

Escola, Héctor Jorge – Compendio de Derecho Administrativo. Buenos Aires: De palma, 1984.

Francisco Gómez Valdez: proceso contencioso administrativo, España: 1990

Gaceta jurídica Constitución Política del Perú del año 1993, Lima-2005

Ley de bases de la carrera administrativa y de remuneraciones del sector público, Perú -2013

Ley del profesorado N° “24029”, Perú

Patrón Faura Pedro - Derecho administrativo y administración pública, España 1992

VII.- ANEXOS:

1. ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE JUDICIAL N°2007-00896-0-1301-JR-CI-1

MATERIA: CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SUMILLA: NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO

SUJETOS PROCESALES

DEMANDANTE: CELESTINO JARA HILDA JUDHIT

DEMANDADO: DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE
LIMA PROVINCIAS

DEMANDADO: UGEL N° 16 DE BARRANCA

EXPEDIENTE JUDICIAL N°2007-00896-0-1301-JR-CI-1

1.- Que con fecha 20 de noviembre del año 2007, la señora CELESTINO JARA HILDA JUDIHT Presenta la demanda de nulidad de actos administrativos en contra la Dirección Regional de Educación de Lima - Provincias y la UGEL N° 16 de Barranca, en la cual tiene como pretensión la nulidad del acto administrativo y el pago de las dos remuneraciones integras.

Fundamentos Facticos: Que la unidad de gestión educativa local UGEL N° 16 de Barranca , no le ha otorgado correctamente las bonificaciones que le corresponde a la señora CELESTINO JARA HILDA JUDIHT, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 52 de la ley del profesorado que por haber cumplido 20 años de servicios oficiales prestados al estado, de tal manera que se le ha otorgado una ínfima cantidad por el indicado concepto, monto dinerario que no refleja las remuneraciones totales e integras a que se refiere el artículo de la ley antes mencionado y que su empleadora le otorgo conforme a la RDU N° 01725 de fecha 24 de Agosto del 2007(2) remuneraciones totales e integras por concepto de haber cumplido 20 años de servicios oficiales prestados al estado equivalente S/119.62,transgrediendo la real interpretación que sustenta dichos beneficios, que dispone el otorgamiento de (2) remuneraciones integras y/ o totales por cumplir 20 años de servicios oficiales prestados al estado.

La demandante apela el RD de la UGEL N° 01725 de fecha 24 de agosto del 2007 y fue declarada improcedente dicha apelación, con la resolución directoral regional N° 01782 de fecha 17 de octubre del año 2007, con la cual se agotó la vía administrativa.

2.- El Juzgado Civil con la resolución N° 01 de fecha 23 de noviembre del año 2007 admiten a trámite la demanda instaurada por la señora CELESTINO JARA HILDA JUDIHT sobre la nulidad de resolución administrativa y otros.

3.- Con la resolución N° 02 de fecha 08 de febrero del 2008 nos indica que las partes demandadas han sido notificadas correctamente y al no haber contestado la demanda en el plazo establecido; deciden declarar rebelde a la demandada dirección regional de educación de Lima - Provincias y la UGEL N° 16 de Barranca.

4.- La resolución N° 03 de fecha 08 de febrero del 2008 se declara saneado el proceso y a la vez fijan los puntos controvertidos y Admitiéndose los medios probatorios de la demandante.

5.- La demandante presenta un escrito de fecha 28 de Marzo del 2008 subrogando al letrado anterior y con la resolución N° 04 se tiene por subrogado al anterior letrado de la demandante y se le reitera a la UGEL N° 16 de Barranca y la Dirección Regional de Educación de Lima – Provincias que no han derivado la resolución directoral de la UGEL N° 16 N° 01725 de fecha 24 de Agosto del 2007 y la resolución directoral regional N° 01782 de fecha 17 de Octubre del año 2007, bajo apercibimiento de poner en conocimiento del hecho al ministerio público , para el inicio del proceso penal correspondiente.

6.- La demandante presenta un escrito de fecha 05 de junio del año 2008, solicitando que se haga efectivo el apercibimiento decretado mediante la resolución N° 04 de fecha 21 de abril del 2008 y mediante la resolución N° 05 de fecha 16 de junio del 2008 ordena que se remita las copias certificadas de todo lo actuado al ministerio público para el inicio del proceso penal correspondiente.

7.- De acuerdo a la resolución N° 6 de fecha 07 de Julio del año 2008 el Juzgado deja sin efecto la ejecución de apercibimiento decretado en la resolución N° 05 por tal motivo que en forma extemporánea la Dirección Regional de Educación de Lima – Provincias ha remitido los expedientes administrativos del caso.

8.- Con la resolución N° 07 de fecha 02 de Setiembre del 2008, dan cuenta del dictamen fiscal presentado el 28 de agosto del 2008 y que las partes pueden informar oralmente dentro el plazo de tres días.

9.- El 19 de agosto la Dirección Regional de Educación de Lima – Provincias presenta un escrito indicando a su representante y a la vez adjuntando los documentos que fueron solicitados por el juez, toda vez que con la resolución N° 08 da por apersonado al proceso al procurador público.

10.- La resolución N° 09 de fecha 02 de diciembre el Juez da cuenta que las cédulas de notificación de la resolución cinco, Seis, siete y ocho sea notificados en el domicilio real de la demandada.

11.- En la resolución N° 10 de fecha 25 de agosto del año 2009 el juez declara nulo todo lo actuado hasta la resolución N° 01 porque no se ha notificado al procurador público del gobierno Regional de Lima-Provincias con la demandada.

12.-El 29 de Setiembre la procuraduría Pública Regional presenta un escrito contestando la demanda y en la resolución N° 11 de fecha 30 de setiembre del 2009 tiene por apersonado al proceso al procurador con la contestación de la demanda.

13.- Con la resolución N° 12 de fecha 07 de octubre del año 2009 el Juez da por contestada la demanda, declara saneado el proceso, fija los puntos controvertidos y admite los medios probatorios ofrecidos por la demandante y dispone prescindir la realización de la audiencia de pruebas y que sean remitido los autos a la Fiscalía Civil y Familia para que emita su dictamen

14.- En la resolución N° 13 el Juez da cuenta que la resolución N° 12 no ha sido notificado a la UGEL N° 16, pero si se notificó a la Dirección Regional de Educación de Lima – Provincias, por lo que no causa indefensión a esta parte procesal; en consecuencia, se sigue con el proceso y que se notifique a la Fiscalía Civil y Familia para que emita su dictamen tal como lo estipula la resolución N° 12.

15.- El 14 de diciembre del 2009 la fiscalía civil y familia emite su dictamen y con la resolución N° 14 el juez ordena que notifiquen a las partes y que se ponga los autos a despacho para sentenciar.

16.-El 28 de diciembre del año 2009 el Procurador Público Regional presenta su alegato por escrito informando que, al otorgarle 02 remuneraciones permanentes por haber cumplido 20 años servicios, señalando que dicha resolución contraviene el texto de la ley por cuanto debió otorgarse la remuneración integra, solicitando se le restituya la suma dineraria mencionada,

Por cuanto el hecho de la materia se originó el 23 de Julio del 2007 (fecha de la vigencia del quinquenio) y con la expedición de la resolución directoral UGEL 16 N° 001725 del 24 de Agosto del 2007 , hecho que se ha suscitado , cuando ha estado en vigencia el DS N° 008-2005- PCM del 02 de Marzo del 2005, que deroga a su vez al D.S. N° 041-2001-ED, y restablece la vigencia de la aplicación en los pagos de estos subsidios las remuneraciones totales permanentes, adema que la sentencia expedida por la sala social de derecho constitucional y social de corte suprema de justicia de la república , en el expediente AP N° 438-2007 , no es aplicable a la sentencia porque este entro en vigencia el 07 de Setiembre del 2007 ; es decir ocurrió antes de la expedición de la sentencia suprema y manifiesta que las sentencia de inconstitucionalidad de una norma , la cual no es retroactiva y debe declararse infundada la demanda

17.- La resolución N° 16 de fecha 29 de Diciembre del año 2009 el Juzgado Civil Transitorio de Barranca dicta la sentencia declarando fundada la demanda interpuesta por doña CELESTINO JARA HILDA JUDIHT contra la unidad de gestión educativa local N° 16 de Barranca y la Dirección Regional de Educación de Lima , sobre el proceso contencioso administrativo y en consecuencia declaro la nulidad parcial de la resolución directoral de la UGEL 16 N° 001725 del 24 de Agosto del 2007 y declaro la nulidad total de la resolución directoral regional N° 01782 de fecha 17 de Octubre del año

2007; ordenando que la demandada, a través de sus representantes legales, procede a pagar en calidad de reintegro la cantidad de S/ 2,267.02 (dos mil doscientos setenta y siete con 02/100 nuevos soles).

18.- Con fecha 25 de enero del 2010 la demandada interpone apelación de sentencia con efectos suspensivos debiendo elevarse al superior jerárquico, a fin de que sea revisado y disponga su revocatoria declarándola infundada y con la resolución N° 18 se resuelve conceder el recurso de apelación interpuesto, con efecto suspensivo

19.- El 03 de Julio del 2010 la Fiscalía opina que se confirme la sentencia impugnada que declara fundada la demanda, porque si bien el decreto supremo D.S. N° 041-2001ED fue derogado por el D.S. N° 008-2005- PCM del 03 de marzo del 2005, que restablecía la aplicación del decreto supremo N° 051-91-PCM, que establece nuevamente que la gratificación por haber cumplido 20 años de servicios se debe otorgar sobre la base de las remuneraciones totales permanentes. No obstante, es preciso considerar que el decreto supremo N° 041-2001-ED, cuando dispuso otorgar esta gratificación en base a la remuneración total, lo hizo teniendo como fundamento las reiteradas sentencias del tribunal constitucional.

20.- La resolución N° 21 de fecha 4 de junio del 2010, se fijó fecha de vista de la causa para el día 24 de junio del 2010 a las 9:00 am; llegada la fecha ninguna de las partes presento el informe oral correspondiente.

21.- La resolución N° 24 de fecha 13 de Julio del 2010 la sala mixta permanente de la corte superior justicia de Huaura, deciden confirmar la sentencia consentida en la resolución N° 16 de 29 de diciembre del 2009;

en consecuencia, declaro la nulidad parcial de la resolución directoral de la UGEL 16 N° 001725 del 24 de agosto del 2007 y declaro la nulidad total de la resolución directoral regional N° 01782 de fecha 17 de octubre del año 2007; ordenando que la demandada, a través de sus representantes legales proceda a pagar en calidad de reintegro la cantidad de S/ 2,267.02 (dos mil doscientos setenta y siete con 02/100 nuevos soles). A favor de la demandante por haber cumplido 20 años de prestación de servicio a favor del estado, el mismo que deberá ser cumplido dentro del tercer día de notificada; sin costas ni costos del proceso.